



Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

#### REFERENCIA

**EXPEDIENTE No.:** 11001-33-35-010-2022-00292-00  
**ACCIONANTE:** BLANCA NELLY SANCHEZ DE MONTOYA  
**ACCIONADAS:** NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL  
**CLASE:** ACCIÓN DE TUTELA

1.- De conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, concordante con el artículo 1° inciso 1° del Decreto 1382 de 2000, y el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, se **ADMITE** la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por **BLANCA NELLY SANCHEZ DE MONTOYA** con cédula de ciudadanía **25.034.558**, en contra de la entidad **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL**, en procura de la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal.

2.- El Juzgado constata que la parte accionante formuló una solicitud de medida provisional, encaminada a que se ordene a la entidad accionada **“que dentro de las 24 horas siguientes genere las autorizaciones para que se practique los exámenes ordenados por el médico tratante”**, teniendo en cuenta su estado de salud.

3.- La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente.

Dichos presupuestos son los siguientes:

- (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos:  
(a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris).
- (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora).
- (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

4.- En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió *“como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo”*. Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo.

Por tal razón, la solicitud de medida provisional *“debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas”*<sup>1</sup>



*razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.*

5.- Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como *“un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”*.

6.- En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, *“la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.”*

7.- Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que *“si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”*.

8.- Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y analizado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado considera que no se reúnen las condiciones necesarias para acceder a la medida cautelar solicitada. Obvio sin que tal conclusión, implique un prejuzgamiento de la acción de tutela.

9.- En cuanto a la apariencia de buen derecho, el Juzgado constata que dentro de las documentales anexas a la demanda, la accionante aportó la orden de remisión No. 2206002021 por la médica KATHERYN PAOLA BARRETO ACOSTA y de 2 de junio de 2022, que le prescribió a la demandante la realización de una *“endoscopia y colonoscopia bajo sedación”*. Esa constatación implica de manera preliminar existe una orden médica a fin de practicar un examen que determinará el origen de un dolor en la región lumbar que actualmente padece la accionante, según las pruebas anexas al escrito de tutela.

No obstante, el Juzgado no advierte en la admisión de la tutela cuál es el procedimiento administrativo que debe seguirse ante la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para que se hagan efectivas y que la actora haya ese conducto regular ante la entidad. Aunque en el hecho 8 de la demanda la actora indicó que ha tratado de obtener, sin éxito, la cita para la práctica del examen no es menos cierto que las pruebas aportadas a la actuación, hasta este momento, no demuestran ese hecho puntual.



En efecto, una vez analizadas cada una de las órdenes aportadas con el escrito de tutela, el Despacho aprecia que solo constan de un sello de suscripción por la médica tratante, más no que hayan sido radicadas o tramitadas por la actora ante la entidad para la consecución de la cita para la práctica del procedimiento. Ante la falta de elementos de prueba que demuestren (i) cuál es el procedimiento administrativo que deben seguir los afiliados para obtener las autorizaciones para los procedimientos y exámenes que ordenan los médicos tratantes, (ii) y que la actora haya seguido ese conducto regular de manera infructuosa antes de interponer la acción de tutela, es menester concluir que la medida cautelar debe ser denegada.

Será en el fallo de fondo en el que se determine (a) cuál es el trámite administrativo que deben seguir los afiliados para la consecución de los tratamientos y exámenes médicos a partir de la información que reporte en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en la contestación de la tutela, (b) si la actora siguió efectivamente ese conducto regular, (c) o si no lo hizo, analizar si dicho trámite resulta racional o razonable para la garantía del derecho a la salud. Solo por mencionar algunos temas que serán materia de análisis en la decisión de fondo, en caso de que la tutela cumpla los requisitos generales de procedibilidad.

En mérito de lo anterior, se dispone:

1. Por el medio más expedito, comuníquese la iniciación de la actuación al Representante Legal de la accionada **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL** y/o quien haga sus veces, a quien se les enviará copia de la tutela y sus anexos para que dentro del término de un (1) día contado a partir de la fecha de su recibo, se refiera sobre todos y cada uno de los hechos relacionados en el escrito de ésta y en especial allegue historia clínica de la accionante **BLANCA NELLY SANCHEZ DE MONTOYA** con cédula de ciudadanía **25.034.558**, indicando los conceptos médicos ordenados, autorizados y practicados, al igual que el procedimiento que deben seguir los afiliados para la consecución de las citas con los especialistas, la realización de los procedimientos médicos, la práctica de exámenes, entre otros.
2. Hágase la salvedad a la entidad requerida de que, de no ser el funcionario competente para el conocimiento de la acción de la referencia, se remita de manera inmediata al que ostente dicha facultad, informando tal situación al Despacho. Póngase de presente la presunción de veracidad prevista en el Decreto 2591 de 1991, respecto a la omisión de no presentar informe en esta acción de tutela.
3. **NEGAR** la medida provisional solicitada en el líbello.
4. Notifíquese mediante comunicación este auto a la parte accionante.
5. Con el valor legal que le corresponda téngase como pruebas las documentales acompañadas con el escrito de tutela.

Los documentos, respuestas, requerimientos o memoriales, deben ser allegados a través de correo electrónico a la dirección [jadmin10bta@notificacionesrj.gov.co](mailto:jadmin10bta@notificacionesrj.gov.co).



**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**AUGUSTO LLANOS RUIZ  
JUEZ**

Jado

Firmado Por:  
Augusto Llanos Ruiz  
Juez Circuito  
Juzgado Administrativo  
010  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c306efe5643a4282f761a4a41ec0aeeb57845149ae93b93b520bb74548fe19bc**

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>